

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D.C, diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

**Ref. No. 2021-00287.**

**I. OBJETO DE LA DECISIÓN**

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda frente a los **recursos de reposición y en subsidio apelación**, formulados por la parte actora contra el auto de fecha 2 de febrero de la presente anualidad mediante el cual se le requirió a fin de que notificara a la parte demandada.

**II. ANTECEDENTES**

1. El apoderado judicial de la parte recurrente adujo que no se ha iniciado con el trámite de notificación a la parte ejecutada por encontrarse pendientes medidas previas, por cuanto no se han consumado las diligencias de embargo y retención de dineros que por cualquier concepto tenga o llegare a tener el demandado en cuentas bancarias, de ahí que, no resulte procedente efectuar el requerimiento de que trata el artículo 317 del Código General del Proceso

Señaló que se debió librar oficio con destino a la Unidad Virtual de Intercambio de Información de la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. De conformidad con los artículos 110 y 319 del Código General del Proceso se corrió traslado del recurso de reposición a la parte pasiva quien dentro del término no se pronunció al respecto.

**III. CONSIDERACIONES**

1. Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma autoridad que profirió una decisión, para que la estudie nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o

adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

**2.** Como primera medida, cumple precisar que la notificación del mandamiento de pago o el auto admisorio de la demanda al extremo pasivo del litigio constituye un acto de suma importancia, por cuanto, de éste depende el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, y por ende el debido proceso, que garantiza una adecuada administración de justicia, sobre el punto la Corte Constitucional en Sentencia T-225 de 2006 precisó:

*“Ha sido reiterada jurisprudencia de la Corte, que para garantizar la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, es necesario que las personas que puedan resultar involucradas en procesos judiciales, cualquiera sea su naturaleza, deban ser enteradas acerca de la existencia del proceso mediante la notificación personal de la primera providencia que se profiere en el mismo, bien trátase de auto admisorio de la demanda o bien de mandamiento ejecutivo o de pago. Noticia de la existencia del proceso que debe hacerse en primer lugar, agotando todos los mecanismos dispuestos en la ley para hacerla de manera personal, y sólo en la medida en que no sea posible cumplir con ésta diligencia es pertinente, de manera subsidiaria, recurrir a otras formas dispuestas para el efecto por la ley”*

Ahora, en cuanto a la terminación anormal del proceso consagrada el artículo 317 del Código General del Proceso la corporación en cita en ejercicio del control constitucional del literal g del numeral 2º precisó que: *“El desistimiento tácito, además de ser entendido como una sanción procesal que se configura ante el incumplimiento de las cargas procesales del demandante, opera como garante de: (i) el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente; (ii) la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia y (iii) el acceso material a la justicia, en favor de quienes confían al Estado la solución de sus conflictos. Todo esto en el entendido de que la racionalización del trabajo judicial y la descongestión del aparato jurisdiccional, finalidades a las que aporta la decisión de terminar anticipadamente un trámite judicial, contribuyen significativamente a hacer más expedito el trámite de los litigios judiciales.”<sup>1</sup>*

De lo anterior se desprende que la figura en comento, puede ser entendida, de un lado, como una consecuencia procesal acaecida en razón a la negligencia, omisión, descuido o inactividad de la parte que ejerce el derecho de acción, en términos generales se sanciona la falta de interés para continuar con el proceso y de otro lado, como un modo de garantizar la administración de justicia de forma célere y eficaz evitando la congestión judicial por actuaciones no atendidas en debida forma, operando en dos eventos en particular, el primero de ellos, que es el aplicado en el caso concreto, señala que hay lugar a la terminación del asunto:

*“1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requerirá el*

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-173 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

*cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.*

*Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.”*

*El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas”*

A su vez el artículo 117 de la Ley 1564 del 2012 establece que los términos señalados para la realización de los actos procesales son perentorios e improrrogables salvo disposición en contrario de manera que deben ser acatados con estrictez pues su inobservancia surtirá los efectos a que haya lugar.

**3.** Descendiendo al caso puesto a consideración del despacho, se advierte que mediante auto de fecha 1º de febrero de la presente anualidad se requirió a la parte actora a fin de que en el término de treinta (30) días realizara las gestiones tendientes a notificar al extremo pasivo so pena de aplicar la sanción procesal dispuesta en el artículo 317 del Código General del Proceso, como quiera que el mandamiento de pago se libró desde el 6 de mayo de 2021.

En tal sentido, revisadas las actuaciones surtidas al interior en el plenario se advierte la improsperidad del recurso formulado, por cuanto se observa que la decisión reprochada se encuentra ajustada a derecho

En efecto, al interior del asunto se observa que en la misma data que se profirió el mandamiento de pago, se decretó como medida cautelar el embargo y retención de los dineros que por cualquier concepto tenga o llegare a tener el demandado en entidades bancarias limitando la medida a la suma de \$108'000.000m./cte., razón por la que de conformidad con lo normado en el artículo 11 del Decreto 806 de 2020 se tramitaron los oficios correspondientes a través del correo institucional del Despacho, siendo así, se advierte que BANCO CAJA SOCIAL, DAVIVIENDA, BANCO PICHINCHA, BANCO FINANDINA, BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE, SCOTIABANK COLPATRIA, BANCO DE BOGOTÁ y CITIBANK emitieron respuesta al requerimiento efectuado informando que el demandado Conjunto Residencial Torres de San Rafael no cuenta con dineros disponibles en esas entidades para efectos de materializar el embargo

De lo anterior se desprende que, no le asiste razón al recurrente, toda vez que, en el presente asunto no se encuentran pendientes actuaciones encaminadas a la

consumación de medidas cautelares conforme lo dispone la normatividad procesal, pues téngase en cuenta que las mismas fueron decretadas desde hace más de 9 meses y las entidades financieras oficiadas emitieron las respuestas correspondientes sin que hayan podido ser efectivas para asegurar el cumplimiento de una posible sentencia favorable.

En ese orden de ideas, como quiera que desde la providencia inicial el proceso ha permanecido inactivo, era procedente efectuar el requerimiento para efectos de notificar a la parte demandada.

**4.** Finalmente, frente al recurso de alzada cabe aclarar que las providencias judiciales son susceptibles de ser revisadas por el superior jerárquico únicamente en los eventos previstos en la ley, de ahí que deba negarse su concesión, por improcedente, dado que el auto mediante el cual se requiere a la parte actora a fin de que integre el contradictorio no se encuentra dentro de los enlistados en el artículo 321 de la Ley 1564 de 2012.

## **I. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **II. RESUELVE**

**PRIMERO: NO REPONER** el auto de fecha 2 de febrero de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: NEGAR** la concesión del recurso de apelación, por improcedente

**TERCERO:** Proceda la parte actora a dar cumplimiento a lo ordenado en la mentada providencia.

**Notifíquese,**<sup>2</sup>

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ  
JUEZ**

---

<sup>2</sup> Este proveído se notificó por estado No. 026 de 11 de marzo de 2022.

**Firmado Por:**

**Iris Mildred Gutierrez  
Juez Municipal  
Juzgado Municipal  
Civil 019  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b77dd8e4285b8b7abf9523ceae854104ca0cda18983d1436ebf52961791bb610**

Documento generado en 10/03/2022 10:54:39 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**